



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE
BOGOTÁ D.C.

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de febrero de dos mil veintiuno (2021)

RADICACIÓN: 11001-33-35-026-2020-00224-000
PROCESO: EJECUTIVO
EJECUTANTE: ABIDAN RUIZ TRUJILLO
EJECUTADA: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL
ORDINARIO: 1100133331026-2016-00213-00

A través de escrito obrante a folios 52 a 56 del expediente digital, la apoderada judicial de la parte actora eleva recurso de reposición en contra del auto de calenda 30 de septiembre de 2020, a través del cual este despacho judicial dispuso inadmitir la demanda.

Debe aclarar el Despacho, que dentro del presente asunto como aún no se ha integrado en contradictorio, no existen otros sujetos procesales a quienes deba correrse traslado del recurso elevado.

Conforme con lo anterior, este Despacho procede a desatar el recurso interpuesto como sigue:

En primer lugar, se tiene que el art. 242 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativos, reza:

“ART. 242.- Reposición. Salvo norma legal en contrario, el recurso de reposición procede contra los autos que no sean susceptibles de apelación o de súplica.

En cuanto a su oportunidad y trámite se aplicará lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil.”

En primer lugar, y conforme a lo definido en el inciso segundo del artículo 242 del C.P.A.C.A., es preciso manifestar que en tratándose del recurso de

reposición, su trámite se rige por los arts. 318 y 319 del C.G.P., en donde se plasma lo siguiente:

“ARTÍCULO 318. PROCEDENCIA Y OPORTUNIDADES. *Salvo norma en contrario, el recurso de reposición procede contra los autos que dicte el juez, contra los del magistrado sustanciador no susceptibles de súplica y contra los de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, para que se reformen o revoquen.*

El recurso de reposición no procede contra los autos que resuelvan un recurso de apelación, una súplica o una queja.

El recurso deberá interponerse con expresión de las razones que lo sustenten, en forma verbal inmediatamente se pronuncie el auto. Cuando el auto se pronuncie fuera de audiencia el recurso deberá interponerse por escrito dentro de los tres (3) días siguientes al de la notificación del auto.

El auto que decide la reposición no es susceptible de ningún recurso, salvo que contenga puntos no decididos en el anterior, caso en el cual podrán interponerse los recursos pertinentes respecto de los puntos nuevos.

Los autos que dicten las salas de decisión no tienen reposición; podrá pedirse su aclaración o complementación, dentro del término de su ejecutoria.

PARÁGRAFO. *Cuando el recurrente impugne una providencia judicial mediante un recurso improcedente, el juez deberá tramitar la impugnación por las reglas del recurso que resultare procedente, siempre que haya sido interpuesto oportunamente.*

ARTÍCULO 319. TRÁMITE. *El recurso de reposición se decidirá en la audiencia, previo traslado en ella a la parte contraria.*

Cuando sea procedente formularlo por escrito, se resolverá previo traslado a la parte contraria por tres (3) días como lo prevé el artículo [110](#).”

En este orden de ideas, al haberse presentado el recurso de reposición dentro del término legal y en debida forma, el Despacho encuentra que el recurso impetrado es procedente y por consiguiente, es viable resolver el mismo.

Pues bien, el motivo de inconformidad de la apoderada es que dentro del escrito contentivo de la acción ejecutiva, se está solicitando la ejecución a la entidad por obligación de hacer, atendiendo las consideraciones expresadas en la parte final del inciso primero de los artículos 430 y 433 del Código General del Proceso, en concordancia con los de del proceso y/o se sirva dar

aplicación a la facultad oficiosa indicada en los artículos 213 y 298 del CPACA, en concordancia con los deberes previstos por el artículo 42 del CGP.

Indica que, la parte resolutive de la sentencia dispuso entre otras cosas, **revisar y reajustar la asignación básica salarial devengada** por el señor Ruiz Trujillo, orden que alude a una obligación de hacer que tiene la entidad ejecutada.

Señala que, en el presente asunto el título ejecutivo cumple con los requisitos formales y sustanciales necesarios para librar la orden compulsiva teniendo en cuenta lo dispuesto en la parte final del primer inciso del artículo 430 del Código General del Proceso.

Arguye que, la manifestación realizada por el despacho dentro de las causales de inadmisión, en lo que tiene que ver con aportar la respectiva liquidación, explicando para tal efecto, cada pretensión junto con los valores que presuntamente adeuda la entidad al ejecutante puede ser suplida haciendo uso de la facultad oficiosa contemplada en el artículo 213 del CPACA, en concordancia con el artículo 298 de la misma norma.

Afirma que, la solicitud de mandamiento por obligación de hacer para que la entidad liquide y pague la sentencia es razonable, habida cuenta que, la entidad ejecutada tiene los elementos necesarios para liquidar la condena, es decir, el certificado del salario y prestaciones sociales.

De la misma manera, la Profesional del Derecho manifiesta en su escrito de alzada que, resulta imposible para el mandante precisar las cifras sobre las cuales se debe dictar la orden de pago, pues se desconocen los valores que ha descontado la entidad por concepto de pagos a seguridad social o la totalidad de las prestaciones que devengaban el ejecutante.

Por último, indica que en un caso similar al que hoy nos ocupa, el Consejo de Estado, mediante auto dictado el 12 de julio de 2018, revoca la decisión proferida por el H. Tribunal Administrativo de Arauca y ordena librar mandamiento de pago, por cuanto la ejecución puede ser adelantada por la obligación de hacer contenida en el título ejecutivo.

Por lo anterior, la apoderada judicial de la parte ejecutante, solicita se revoque la decisión de requerir la liquidación de lo que se intenta que la entidad pague o demostrar que adeuda, habida consideración que, no se

cuenta con los documentos y no se tiene certeza del monto y prestaciones que percibía el actor en servicio activo.

Del mismo solicita a este Despacho Judicial se dicte mandamiento de pago por obligación de hacer, por cuanto la norma no dispone la obligación de presentar liquidación por tratarse de dicha obligación, pues la orden de pagar ya se encuentra inmersa en el numeral cuarto de la parte resolutive de la sentencia emitida por este Despacho Judicial.

Visto esto, el Despacho procedió a analizar la solicitud elevada por la Profesional del Derecho, encontrándose lo siguiente:

Teniendo en cuenta los argumentos esbozados por la apoderada judicial de la parte actora, el despacho procede a realizar el estudio de la alzada elevada por el extremo activo de la litis.

Al respecto, el H. Consejo de Estado a través de providencia del 12 de julio de 2018¹, indicó lo siguiente:

“De igual forma, es de resaltar que el CGP previó la posibilidad de que, mediante el proceso ejecutivo, se hagan efectivas obligaciones de distinta índole, tales como las de dar una cantidad líquida de dinero (Art. 424) o una especie mueble o bienes de género distintos al dinero (Art. 426); así como obligaciones de hacer (Ibidem) y de no hacer (Art. 427).

Habiendo aclarado el objeto y los presupuestos para iniciar un proceso ejecutivo, llama la atención de la Sala que el Tribunal haya expuesto como uno de los fundamentos para aducir la falta de claridad de la obligación a ejecutar, el hecho de que esta no consista en una suma líquida de dinero, aun cuando manifestó que la misma no solo comprende el pago de los valores correspondientes a unas prestaciones sociales (obligación de dar una cantidad líquida de dinero), sino que también alude a la liquidación de los importes respectivos (obligación de hacer).”

Subraya fuera de texto

Al respecto, señala la Máxima Corporación de cierre de lo Contencioso Administrativo que, siempre que uno o más documentos reúnan los requisitos de un título ejecutivo, las obligaciones que allí se contienen se pueden exigir, sin que afecte el hecho de que las mismas sean de distinta naturaleza, que para el caso que nos ocupa, es una obligación de **hacer**.

¹ Sentencia 0042 de 2018 - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - consejero ponente: María Elizabeth García González. - Rad. No.: 81-001-23-33-003-2017-00042-01.

Teniendo en cuenta lo anterior, se vislumbra que, la apoderada judicial en su escrito de demanda ejecutiva solicita lo siguiente:

“PRIMERA: SE LIBRE MANDAMIENTO EJECUTIVO POR OBLIGACIÓN DE HACER PARA LIQUIDAR Y PAGAR LA TOTALIDAD DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA SENTENCIA DE FECHA 12 DE JULIO DE 2018, en contra de LA NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA – EJERCITO NACIONAL, de conformidad con los parámetros allí establecidos.

SEGUNDA: *Se condene en costas a la parte demandada”*

De la misma manera, se evidencia en los hechos de la demanda, que la parte actora radicó ante la entidad ejecutada petición solicitando la certificación de salarios y prestaciones sociales devengados por el señor Ruiz Trujillo a partir del 26 de mayo de 2012, hasta la fecha en que se genere el retiro definitivo del servicio activo; ello con el fin de concretar la liquidación adeudada por la entidad, sin embargo, afirma la apoderada judicial que, la Coordinadora Grupo de Reconocimiento de Obligaciones Litigiosas y Cobro Coactivo del Ministerio de Defensa no da respuesta de fondo, pues únicamente se limita a informar sobre el turno del pago, sin pronunciarse respecto de la liquidación de las obligaciones contenidas en la sentencia.

Enfatiza la apoderada judicial que, la sentencia dictada por este Despacho Judicial el 12 de julio de 2018, presta merito ejecutivo por obligación de hacer, por cuanto la misma ordena la liquidación de unas obligaciones.

De acuerdo con lo anterior, debe señalar el Despacho, que le asiste razón a la apoderada judicial de la parte ejecutante, teniendo en cuenta que, la Jurisprudencia decantada por el H. Consejo de Estado, es clara en explicar los casos en los cuales se debe ejecutar obligaciones por hacer, cuando no radique en una suma liquida de dinero.

En virtud de lo anterior, se **REPONDRÁ** el auto calendado 30 de septiembre de 2020, y en su lugar se procederá a librar mandamiento de pago por la obligación de hacer.

CONSIDERACIONES

Como primera medida, el artículo 104 de la ley 1437 de 2011, indica en el numeral 6to ibídem, que esta Jurisdicción conocerá, entre otros, de “Los

ejecutivos derivados de las condenas impuestas y las conciliaciones aprobadas por esta jurisdicción, así como los provenientes de laudos arbitrales en que hubiere sido parte una entidad pública; e, igualmente los originados en los contratos celebrados por esas entidades.”.

En este sentido, el artículo 297 del C.P.A.C.A., prevé:

“Artículo 297. Título ejecutivo. Para los efectos de este Código, constituyen título ejecutivo:

1. Las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias. (...)”

Ahora bien, teniendo en cuenta que, en la Jurisdicción Contencioso Administrativo, tiene plena vigencia todo el articulado de la Ley 1564 de 2012, por la cual se expidió el Código General del Proceso², se tiene que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en los aspectos no regulados en el mismo se seguirán las reglas del Código de Procedimiento Civil (hoy Código General del Proceso).

Conforme con lo anterior, se observa que el artículo 422 del Código General del Proceso, en relación con las calidades particulares del título ejecutivo, determinó frente a providencias judiciales, lo siguiente:

“Artículo 422. Título ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles *que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo [184](#).”*

Así las cosas, de conformidad con los artículos reseñados, el proceso ejecutivo tendría varios derroteros a tener en cuenta en casos como el presente:

² CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN TERCERA. SUBSECCIÓN C. Consejero Ponente: ENRIQUE GIL BOTERO. Bogotá D.C., quince (15) de mayo de dos mil catorce (2014). Radicación número: 05001233100020110046201 (44.544). Demandante: Jerlis Antonio Mercado Castillo y otros. Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Ejército Nacional. Referencia: Acción de Reparación Directa.

1. Solicitud: A través de memorial radicado por la abogada **ALEJANDRA SIERRA QUIROGA** en representación del señor **ABIDAN RUIZ TRUJILLO**, solicitó al Juzgado que se libre mandamiento ejecutivo **POR OBLIGACIÓN DE HACER** en contra de la **NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL**, ordenando a la entidad ejecutada la liquidación y pago de la totalidad de las obligaciones contenidas en la sentencia de fecha 12 de julio de 2018.

Luego entonces, se encuentra satisfecho el requisito de solicitar la ejecución con base en la sentencia, ante el juez del conocimiento, para que se adelante el proceso ejecutivo.

Ahora bien, adicional a la solicitud, se hace preciso analizar si la misma fue elevada dentro del término que la Ley que otorga para ello.

Al respecto, el inciso K del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, norma vigente al momento de la expedición de la sentencia, frente a la oportunidad de presentación de la acción ejecutiva determinó:

“Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada:

(...)

*k) Cuando se pretenda la ejecución con títulos derivados del contrato, **de decisiones judiciales proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en cualquier materia** y de laudos arbitrales contractuales estatales, **el término para solicitar su ejecución será de cinco (5) años contados a partir de la exigibilidad de la obligación en ellos contenida.** (...)*

Negrilla y subraya fuera de texto original

A su vez el artículo 192 del mismo ordenamiento dispuso en su inciso segundo establece:

“Artículo 192. Cumplimiento de sentencias o conciliaciones por parte de las entidades públicas.

(...)

Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o devolución de una suma de dinero serán cumplidas en un plazo máximo de diez (10) meses, contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia. Para tal efecto, el beneficiario deberá presentar la solicitud de pago correspondiente a la entidad obligada. (...)

Negrilla y subraya fuera de texto original

Así las cosas, en principio la ejecutante contaba con un término de cinco años a partir de la exigibilidad del derecho, para la presentación de la demanda ejecutiva, es decir dicho término inicia luego de vencidos los 10 meses que tiene la entidad para realizar el pago.

En el plenario se constata que el ejecutado es la **Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional**.

Del mismo modo, en el plenario se evidencia que la demanda fue radicada ante la Oficina de Apoyo Judicial para los Juzgados Administrativos el 10 de julio de 2020, (fl.2° expediente digital), circunstancia por la cual en los términos expuestos por el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la presente demanda se encuentra presentada dentro del término legal, teniendo en cuenta que la ejecutoria de la sentencia fue del **27 de julio de 2018**.

Por lo anterior, es claro que la demanda ejecutiva fue presentada dentro del término de Ley.

De la misma manera, se puede constatar, que la parte actora radicó solicitud de cumplimiento a un fallo judicial el **19 de febrero de 2019 y 14 de mayo de 2020**, tal y como se observa a folios 26 a 29 y 57 del expediente digital.

2. Título Ejecutivo: En el presente asunto, el título ejecutivo lo constituye la sentencia proferida por este Juzgado el 12 de julio de 2018. (fl. 61 a 70).

Conforme con lo anterior, el Despacho considera que la sentencia proferida, configura un título ejecutivo, por darse cumplimiento a los requisitos exigidos por el artículo 422 del Código General del Proceso, en razón a que la decisión se encuentra debidamente ejecutoriada y del contenido de la misma se desprende **la obligación de hacer** hoy reclamada por el ejecutante, que corresponde a la liquidación y pago de la totalidad de las

obligaciones contenidas en la sentencia de fecha 12 de julio de 2018, por parte de la entidad ejecutada.

Así las cosas, es procedente el mandamiento de pago por obligación de hacer respecto de la liquidación y pago de la totalidad de las obligaciones contenidas en la sentencia de fecha 12 de julio de 2018.

En mérito de lo expuesto, en los términos del artículo 433 del Código General del Proceso, el Despacho dispondrá librar mandamiento ejecutivo **POR OBLIGACIÓN DE HACER** a favor del señor **ABIDAN RUÍZ TRUJILLO** en contra de la **NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO**.

En virtud de lo expuesto, el Despacho,

RESUELVE:

PRIMERO: REPONER la providencia de data 30 de septiembre de 2020, de conformidad con las razones expuestas a lo largo de este proveído.

SEGUNDO: Librar mandamiento de pago por **OBLIGACIÓN DE HACER**, a favor del señor **ABIDAN RUÍZ TRUJILLO** en contra de la **NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO**, consistente en que la entidad ejecutada pague la totalidad de las obligaciones contenidas en la sentencia de fecha 12 de julio de 2018, esto es, el reajuste de la asignación básica salarial devengada por el actor a partir del 26 de mayo de 2012 y hasta la fecha en la cual se genere o generó el retiro definitivo del servicio.

TERCERO: Para los efectos del numeral 4° del artículo 171 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el artículo 2° del decreto 2867 de 1989, se fija la suma de **SESENTA MIL PESOS (\$60.000,00.) m/cte**, que deberá consignar la parte demandante en el término de 10 días contados a partir de la notificación de la presente providencia, **en la CUENTA CORRIENTE ÚNICA NACIONAL No. 3-082-00-00636-6 del Banco Agrario “CSJ-DERECHOS, ARANCELES, EMOLUMENTOS Y COSTOS –CUN”**.

CUARTO: Notifíquese esta providencia personalmente a la entidad demandada, **NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL –**

EJÉRCITO, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 2080 de 2021.

QUINTO: Advertir a la entidad ejecutada que dispone de un término de diez (10) días para cumplir con la orden proferida en la sentencia de data 12 de julio de 2018.

SEXTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del mandamiento ejecutivo, la demandada podrá proponer excepciones de mérito, siguiendo las reglas contenidas en el artículo 442 del C.G.P.

SÉPTIMO: Notifíquese personalmente al señor representante del Ministerio Público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 2080 de 2021.

OCTAVO: Notifíquese personalmente a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica de la Nación, en los términos del artículo 48 de la Ley 2080 de 2021.


En el evento en que la agencia decida intervenir en el proceso, el mismo se suspenderá en los términos del artículo 611 del Código General del Proceso.

NOVENO: Se reconoce personería jurídica a la abogada **ALEJANDRA SIERRA QUIROGA**, identificada con cédula de ciudadanía número 52.718.256 de Bogotá y portadora de la tarjeta profesional 167.226 del C. S. de la J., como apoderada judicial del demandante, en los términos y para los fines del poder otorgado visible a folio 58 del expediente digital.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

71

Firmado Por:

 JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C. Por anotación en ESTADO ORDINARIO notifico a las partes la providencia anterior hoy 17 DE FEBRERO DE 2021 , a las ocho de la mañana (8:00 a.m.) LIZZETH VIVIANA CANGREJO SILVA SECRETARIA

ANDRES JOSE QUINTERO GNECCO

JUEZ CIRCUITO

JUZGADO 026 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO BOGOTA-CUNDINAMARCA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

201727603e57178dd36f40ab46b483d3b1e2f8203e7b41d5ec757726fef92975

Documento generado en 16/02/2021 04:15:55 PM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>